000604/2023

Comodoro Rivadavia, 27 de diciembre de 2024.

VISTOS Y CONSIDERANDO

Estos autos caratulados: **"H. S., A. H. Y OTRA c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", Expte. N° 604/2023.**

I. El 31/8/2023 (CRU-00708300000061571-9), la parte actora interpone escrito "Recurso de Apelación y Nulidad en los términos del artículo 52 y s.s. de la Ordenanza 5830/95 y CPCCCH" contra la Resolución N° 14/2023 -17/7/2023- dictada por el Tribunal Administrativo Municipal de Faltas de ésta ciudad.

El 27/10/2023, la actora denuncia error material involuntario en el escrito de inicio donde deberá leerse "Recurso Contencioso Administrativo" y no "Recurso de Apelación en los términos del artículo 52 y s.s. de la Ordenanza 5830/95 y CPCCCH". El 2/11/2023, se tuvo por modificada la demanda y ofrecida la prueba (art. 334 del C.Pr.).

Ello así, la actora plantea recurso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a fin que se revoque la Resolución N° 14/2023 de fecha 17/07/23 del Tribunal Administrativo Municipal de Faltas de ésta ciudad, en tanto confirma el Acta de comprobación N° 64302 de fecha 15/04/2023, que dio origen a este proceso, la cual no reúne los requisitos esenciales mínimos previstos en la normativa, toda vez que el hecho en que pretende fundarse no constituye infracción alguna.

Hace un repaso de los hechos de la causa y del expediente administrativo municipal N° 4565-H-2023.

Expone los antecedentes del caso y los agravios que le causa la resolución impugnada.

Manifiesta que contra la Resolución N° 4090/23 fechada el 4 de mayo de 2023 interpuso el recurso de reconsideración el cual fue desestimado mediante Resolución fechada el 31/5/2023 que le fuera notificada el 5/5/2023; por último, interpuso recurso de apelación en conjunto con el de nulidad, el cual fue rechazado mediante la Resolución N° 14/2023, interponiendo el presente recurso.

Solicita que la Resolución N° 14/2023 sea revocada toda vez que le genera los siguientes agravios: Primero, la normativa citada en el Acta y en la Tercera Resolución no es aplicable al caso concreto. Sostiene que el servicio de transporte de pasajeros privado se encuentra contemplado en el Código Civil y Comercial y la falta de regulación no puede traducirse en una prohibición de realizar dicha actividad. Agrega que no se puede exigir a quien conduce utilizando U. que cuente con la habilitación del taxi ni del remis, dado que son servicios distintos. Señala que el Acta contradice expresamente actos de carácter y alcance federal. Añade que la Superintendencia de Seguros de la Nación dictó Resolución N° 615/2019 mediante la cual oficializó las pólizas y ciertas cláusulas específicas para los servicios de movilidad a través de plataformas tecnológicas -como U.- y el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas labró un informe en el 2019 donde incluyó a U. como una "plataforma intermediaria digital". Concluye el agravio que la legalidad de U. ha sido reconocida por normas de alcance nacional. Considera que se viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho a trabajar; que existen una variedad de plataformas digitales que al igual que U., no se encuentran reguladas y sin embargo siguen operando legalmente. Afirma que prohibir U. como pretende

hacerlo la Municipalidad viola derechos humanos básicos al proscribir una actividad lícita y legal. Asegura que el Acta es nula en tanto no cumple con los requisitos esenciales y procesales que determina la normativa municipal para el labrado de actas y que el procedimiento es nulo.

Asimismo, se agravia y desarrolla los motivos por los cuales considera que la normativa citada en el Acta y en la última Resolución no es aplicable al caso concreto y por lo tanto debe desestimarse la multa ilegal y arbitrariamente impuesta.

Entiende que la falta de regulación municipal no puede se puede traducir en una prohibición de realizar una actividad contemplada en el CCCN. Asimismo, asevera que no se puede exigir a quien conduce un U. que cuente con la habilitación del autoremis, dado que son servicios distintos. Agrega que además U. no es un servicio público.

Señala que el Ministerio de Transporte de la Nación lo calificó como "Transporte Privado" y destacó la importancia de su funcionamiento durante la pandemia.

Se queja porque el acta y la resolución pretenden aplicar una norma que regula un servicio en forma diferente. Sostiene que la administración aplica una normativa en forma diferente –prevista para el servicio público, no el privado como es el servicio que se presta en este caso-, e incoherente con el hecho que pretende sancionar, resultando en un acto completamente arbitrario. El servicio de transporte privado a través de aplicaciones móviles no se encuentra regulado en la legislación local, como el mismo Tribunal de Faltas lo ha reconocido, por tal motivo, el procedimiento es pasible de ser anulado. Asegura que al prohibir U. como lo pretende hacer la Municipalidad proscribe una

actividad lícita y legal y viola derechos humanos básicos. Asevera que cualquier sanción que se pretenda imponer en concepto de “transporte sin habilitación” es desproporcionada, y por tanto infringiría el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Hace distintas consideraciones respecto a derechos constitucionales que considera violados. Manifiesta que existe violación al principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional). Cita numerosa jurisprudencia firme que declara la inexigibilidad de las otras habilitaciones previstas en la ley, como el remis o el taxi por estar dirigidas a servicios “parecidos” al de U.

Resalta que el Acta es nula en tanto no cumple con los requisitos esenciales y procesales que determina la normativa municipal para el labrado de actas -art. 35, del Código de Procedimientos en Materia de Faltas. Achaca que en la descripción de la supuesta infracción, se detalla que “presta servicio como chofer de autoremís sin habilitación municipal”, no aclarando qué normativa exigiría dicha habilitación, tampoco el inspector comprueba en detalle que haya estado prestando un servicio de remis. Sostiene que se atenta directa y deliberadamente a mi derecho de defensa en juicio, ya que simplemente se informa una supuesta infracción basándose en artículos que no resultan aplicables.

Finalmente considera en el punto IV 10 que es nulo el procedimiento, la primera Resolución y todas las otras que la validan posteriormente.

Ofrece pruebas y hace reservas del caso federal y de recurrir ante la CIDDHH.

Mediante escrito digital (ID 1456953) amplia recurso contencioso administrativo. Ofrece prueba informativa y testimonial.

II. Delimitada de este modo la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, corresponde, en los términos de los artículos 132 y 133 de la Ley XVI N° 46, expedirse respecto de la admisibilidad del recurso intentado en razón de las normas aplicables al caso y hechos invocados.

En primer lugar, ha de señalarse que estamos ante una pretensión de modificación de resoluciones administrativas que, por su objeto, habilita la vía procesal adoptada.

A tal efecto, del análisis de la documentación solicitada -Expte. Administrativo N° 4565-H-23-, surge que se encuentra cuestionado el acto definitivo adoptado por la municipalidad, en contra del derecho que invoca el presentante.

Por otro lado, la demandada es la administración pública, Municipalidad de Comodoro Rivadavia, la resolución N° 14/23 no es reproducción de otra que haya causado estado y no coexiste con la presente otra vía jurisdiccional que permita la reparación del derecho que se alega lesionado.

Asimismo, la presentación es tempestiva teniendo en cuenta que la notificación de la Resolución N° 14/23 tuvo lugar el día 25 de agosto de 2023 y el recurso fue presentado en fecha 2 de septiembre del mismo año –fecha de ingreso del escrito 31/8/23 21:57 hs-; es decir, dentro del plazo previsto por el art. 136 de la Ley XVI-46.

En consecuencia, a los fines procesales, encontrándose reunidos los requisitos para la procedencia del recurso contencioso administrativo,

en virtud de lo dispuesto por los artículos 132 a 134 y 136 de la ley XVI-46, corresponde declarar su admisibilidad, y correr el traslado a la contraria, conforme dispuesto en los artículos. 264, 265, 490 y concordantes del CPCC, aplicables por previsión del artículo 137 de la mencionada ley.

III. Por último, en atención a la remisión genérica que el artículo 137 de la Ley XVI N° 46 hace al Código Procesal Civil, en ejercicio de las facultades previstas por el apartado e) del inciso 3 del artículo 34 del citado Código, se hace saber a las partes que el presente caso tramitará de conformidad con las previsiones del proceso sumario.

Por ello, la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción Judicial N° II con asiento en Comodoro Rivadavia,

RESUELVE:

1) Declarar formalmente admisible el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora (CRU-00708300000061571-9) contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

2) Hacer saber a las partes que el presente litigio tramitará de conformidad con las previsiones del proceso sumario.

3) Correr traslado del recurso y prueba ofrecida a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, por el término de veinte (20) días.

4) Regístrese y notifíquese.

REGISTRADA BAJO EL N° 690 DEL AÑO 2024 DEL LIBRO DE SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS